



**AUTO INTERLOCUTORIO**

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTE</b>	Carlos Alberto Sánchez González
<b>DEMANDADOS</b>	Sociedad Industria Nacional de Gaseosas S.A. – INDEGA S.A.
<b>LITISCONSORTES</b>	Premotec LTDA Proservis Generales S. A. Cooproinso Wimar CTA
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-014-2011-01272-02
<b>TEMA</b>	Excepción previa de cosa juzgada y falta de competencia
<b>DECISIÓN</b>	Confirma el auto recurrido

El quince (15) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 092** de discusión de proyectos, dentro del proceso ordinario promovido por **CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ** contra la **SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. – INDEGA S.A.**, trámite al que se vincularon como litisconsortes necesarios por pasiva a **PREMOTEC LTDA, PROSERVIS GENERALES S. A., COOPROINSO** y **WIMAR CTA**, con radicado 05-001-31-05-014-2011-01272-02.

• **AUTO RECURRIDO:**

En audiencia celebrada el 9 de diciembre de 2022, el Juzgado Decimocuarto Laboral del Circuito de Medellín declaró no probadas las excepciones de falta de competencia y cosa juzgada, por considerar a la primera como infundada y la segunda que debe resolverse en la sentencia.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue apelada por Indega S.A, entidad que a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: i) falta de competencia: se debió declarar probada esta excepción, en la medida que el contrato comercial firmado entre las partes no fue desconocido por estas, no hubo tacha de falsedad, por lo que en principio es válido. En este se plasmó la cláusula compromisoria, por lo que en principio debe ser el tribunal de arbitramento al que allí se aludió quien diga si es competente o no para conocer este conflicto; ii) transacción cosa juzgada: si bien en el contrato se hace relación a un lapso menor al que indica el demandante, lo cierto es que el despacho debió pronunciarse acerca de este lapso. El hecho de que pudiese haber derechos laborales, precisamente ese fue el objeto de la transacción, esto es, definir en ese asunto las que las partes entendían que ese asunto tenía una naturaleza distinta a la laboral. No tendría ningún sentido que el legislador hubiera habilitado a las partes para precaver futuros litigios si con el argumento de que posteriormente un juez pudiera evidenciar que lo allí acontecido fue una relación de trabajo, entonces no fuera aplicable esa forma de extinguir las obligaciones. Añadió que, dentro de las posibilidades del contrato de transacción y de la conciliación, se encuentra aquella en que las partes se ponen de acuerdo respecto de la naturaleza de la relación jurídica. Reiteró que en el presente asunto las partes dijeron que se trataba de un contrato comercial. Este acuerdo impide que se reabra el debate por la vía judicial, por lo que considera que dentro del lapso indicado en el acuerdo debió declararse la excepción de cosa juzgada.

- **ALEGATOS:**

**Indega S.A.:** Como alegatos presentó argumentos similares a los expuestos con la sustancian del recurso de apelación. Con relación a la excepción de falta de competencia por la existencia de cláusula compromisoria, advirtió que *“Si bien es cierto el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, limitó la validez de la cláusula compromisoria en materia laboral, a que la misma se encontrara plasmada en convención o pacto colectivo, dicha limitación debe entenderse en referencia a una relación contractual, laboral. Por ejemplo, de acuerdo a la norma en comento, es evidente que una vez celebrado*

un contrato de trabajo, no sería viable estipular válidamente una cláusula compromisoria, para que un árbitro o Tribunal de arbitramento, resolviera un conflicto respecto del pago de las prestaciones sociales (salvo su consagración en pacto o convención colectiva); no obstante el alcance la norma en análisis, no puede llegar a restarle validez a dicha cláusula, cuando las partes celebraron un contrato comercial, en el cual los otorgantes definieron la naturaleza de relación contractual, como una diferente a la laboral”; de otra parte, con relación a la excepción de cosa juzgada, manifestó “Sobre el primer razonamiento del señor Juez, estamos en desacuerdo, pues, precisamente en el acuerdo de transacción, las partes de manera clara e inequívoca decidieron establecer para todos los efectos, que la relación jurídica sostenida entre ellas fue una de naturaleza comercial (...) De conformidad con lo anterior, y según la tesis del a quo, nunca podría declararse la validez de un contrato de transacción en materia laboral, pues bajo el pretexto de no violentarse derechos laborales irrenunciables, siempre sería competente la Jurisdicción laboral, para establecer la existencia de los derechos en disputa y solo si los acuerdos transaccionales coincidieran con las sentencias, estos se reputarían válidos, lo cual es un despropósito monumental, pues precisamente la transacción, la conciliación, entre otros instrumentos negociales, hacen parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos, que bien sean auto compositivos en el primer caso, o hetero compositivos en el segundo, buscan una solución pronta y eficaz para las partes, además que implican la descongestión judicial que tanto aqueja al sistema de administración de Justicia. Ahora, en lo relacionado con la disparidad entre de los periodos que se señalan en la demanda, como de duración de la relación de trabajo, respecto de aquellos que comprende la transacción, que por cierto existe, no era suficiente para que el a quo, despachara de forma total a excepción, pues lo procedente hubiese sido, declararla probada respecto del lapso comprendido en el contrato de transacción, esto es, entre el 23 de septiembre de dos mil ocho (2008) y terminó el diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010)”. Como consecuencia, solicitó se revoque la providencia y en su lugar se tengan por probadas las excepciones formuladas.

**Demandante:** “Respecto de la excepción de falta de competencia del juez laboral: Resulta incontrovertible que el objeto del I litigio consiste en determinar si la relación jurídica que existió entre el demandante e INDEGA S.A. consistió en una relación de índole comercial o por el contrario a un vínculo de naturaleza laboral lo que implicaría en virtud del principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formas reconocer la existencia de derechos laborales irrenunciables por parte del trabajador. En tal sentido debe señalarse que el Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social le asigna de manera exclusiva al juez laboral la competencia para resolver sobre los conflictos originados en una alegada relación de trabajo. De tal manera no puede confundirse la competencia de la justicia arbitral sobre aspectos que serían propios de una relación comercial de concesión para la reventa de productos a asuntos que no se corresponden con tal vínculo jurídico sino con una relación laboral. Así mismo, debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico tal y como lo señaló el juez de primera instancia limita la aplicabilidad de cláusulas compromisorias suscritas individualmente por los trabajadores, reconociendo su carácter de parte débil dentro de la relación laboral, manteniéndole una garantía de juez natural del juez laboral quien conoce los

*principios esenciales de esta disciplina y otorga prerrogativas indispensables para mantener un equilibrio real como la gratuidad de la justicia. Así las cosas, como lo que se discute no son aspectos relativos al cumplimiento de un contrato de concesión para reventa sino a la existencia de una relación laboral es innegable que la competencia le corresponde al juez laboral y en tal punto debe ser confirmada la decisión de primera instancia. Respecto a la decisión de posponer para decidir la excepción propuesta como previa de transacción: Tal y como se le señaló al juez de primera instancia al momento de alegar sobre las excepciones previas propuestas: i.) en el ámbito del derecho laboral por disposición constitucional no son conciliables derechos mínimos del trabajador (Art. 53); ii.) en el caso concreto la transacción que se suscribió tenía como fuente la existencia de un denominado contrato de concesión para la reventa y no una transacción respecto de derechos laborales generados como consecuencia de la declaratoria de un contrato realidad o la existencia de una relación laboral encubierta, por lo cual frente a ello no existe una transacción (reiterando en cualquier caso que aquella no tendría validez frente a derechos irrenunciables como la seguridad social tal y como lo entendió el juzgado de primera instancia) y iii.) que la decisión del demandante de suscribir el acuerdo de transacción al que se hace referencia se vio determinada por una presión ejercida por INDEGA S.A. para forzar su salida de la compañía. Todo lo anterior implica, como lo entendió el Juzgado de primera instancia, que se haga necesario agotar el periodo probatorio para resolver sobre los efectos del denominado acuerdo de transacción allegado al proceso”*

### **CONSIDERACIONES:**

Atendiendo a la apelación formulada por la demandada Indega S.A., le compete a la Sala el estudio de la procedencia o no de las excepciones previa de falta de competencia y cosa juzgada por suscripción de acuerdo de transacción.

Pues bien, Indega S.A. propuso como previas las excepciones de falta de competencia y cosa juzgada, en los términos siguientes:

**“FALTA DE COMPETENCIA:** Si bien es cierto que la Ley 712 de 2001, excluyo de cierta forma la aplicación de la cláusula compromisoria, lo hizo solamente frente a los contratos laborales. Sin embargo y como se desprende de los hechos como las pretensiones de la demanda, estamos en presencia de un contrato netamente comercial, por lo tanto la solicitud de nulidad del mismo debe tramitarse ante un juez civil quien será el competente para pronunciarse de fondo sobre los conflictos jurídicos y económicos que surjan por estos contratos. En el caso concreto a quien se debe acudir para la declaratoria de nulidad del contrato de concesión para la reventa, como para la solicitud de cualquier otra sanción será ante el Tribunal de Arbitramento, dándole aplicación a la cláusula compromisoria, pactada en el numeral décimo octavo de dicho contrato. El cual reiteramos es un contrato comercial. En conclusión quien será el competente para conocer de cualquier pleito o conflicto surgido por la ejecución o terminación del contrato comercial será el Tribunal de Arbitramento, quien decidirá sobre la nulidad, ineficacia o cualquier otra

*sanción al actor jurídico que celebraron las partes ó si no lo es, debe ser la justicia ordinaria civil quien declare la nulidad del contrato celebrado como se pretende en las pretensiones de la demanda.*

**TRANSACCIÓN – COSA JUZGADA:** *Se fundamenta este medio exceptivo en el hecho que la parte actora y la demandada, mediante un CONTRATO DE TRANSACCION, dejaron en claro, mediante este acuerdo los siguientes aspectos:*

- Que entre ambas partes había existido un contrato comercial denominado "Contrato comercial de Concesión para la reventa"*
- Que el actor había cumplido con su obligación de estar afiliado a la seguridad social como trabajador independiente y pago los salarios y prestaciones de los trabajadores que le correspondían como concesionario.*
- Que las parte prevén mediante el acuerdo cualquier litigio eventual y advierten: " y al mismo es válida en asuntos de naturaleza laboral como lo establece el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, han decidido en transar todas las diferencias que hayan existido o pudieren resultar por cualquier concepto derivado del contrato de concesión o, por cualquier otro de naturaleza distinta que pudiere resultar entre ellos..."*

*Según se desprende del mismo objeto del contrato de TRANSACCION las partes ya habían definido, en forma anticipada, transigir sus diferencias, incluso relacionadas con la misma naturaleza del vínculo contractual así este se llegase a considerar de otra naturaleza, como lo sería lo que en este proceso se pretende. Es claro que las parte previamente precavieron este litigio que hoy las vincula, para ello se celebro el acuerdo de transacción, y es por ello que deberá el operador jurídico darle el efecto de cosa juzgada que tiene esta forma de terminación anticipada de un proceso judicial tal y como lo señala el artículo 2484 del Código Civil y el artículo 15 del CS.T. y SS.*

*Producto de esta transacción, el actor, recibió la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS PESOS (\$3288.006) suma de dinero que fue la contraprestación que el actor recibió producto de la TRANSACCION celebrada y que, como ya se expreso, es un contrato que hace transito a cosa juzgada."*

Procede como consecuencia esta Sala a pronunciarse acerca de cada una de las excepciones previas, objeto de discusión:

**i) Falta de competencia**

La competencia consagrada en el artículo 2 del Código Procesal de Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de Ley 712 de 2001, no puede determinarse por el resultado del litigio, sino por la posición que las partes adopten en la demanda y su respuesta, ya que si el demandante afirma la existencia de un contrato de trabajo y con fundamento en él reclama prestaciones e indemnizaciones laborales queda determinada la competencia de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, así posteriormente, en el resultado del proceso no se demuestre tal contrato o se pruebe una relación de cualquiera otra naturaleza. En otras palabras, la jurisdicción ordinaria laboral se fundamenta en la afirmación del demandante de que estuvo vinculado con la demandada a través de un contrato de trabajo.

El artículo 130 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece: *“Los patrones y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por arbitradores”*. Por su parte, el artículo 131 de la misma codificación establece: *“La cláusula compromisoria sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia”*

Esta última norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-878/05, providencia en la que se señaló:

*“Desde ya, la Sala debe dejar en claro que el examen y la decisión que se adoptará en esta demanda, no desconocen la importancia de la justicia arbitral como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, incluidos los conflictos laborales, siempre y cuando se cumplan las condiciones mínimas para su funcionamiento, por tratarse de una institución establecida en la Carta, en el artículo 116. Es más, en varias oportunidades la Corte ha avalado el derecho de las partes de acudir a ella, pero entendiendo siempre que es excepcional la habilitación de particulares para solucionar conflictos; que es temporal, es decir, que esta justicia no puede desplazar la ordinaria; y, que recurrir al arbitraje es una decisión voluntaria de las partes...”*

(...)

*El artículo 130 del CST, dice “Los patronos y los trabajadores podrán estipular que las controversias que surjan entre ellos por razón de sus relaciones de trabajo sean dirimidas por árbitros.”*

*Sobre las consecuencias de esta decisión, el artículo 115 de la Ley 446 de 1998, señaló : “Pacto arbitral. Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces.” (se subraya)*

*Ahora, la Ley 446 de 1998, define cláusula compromisoria y el compromiso así:*

*“Artículo 116.- Cláusula compromisoria. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. (...)”*

*“Artículo 117.- Compromiso. El compromiso es un negocio jurídico, por medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen resolverlo a través de un tribunal arbitral. (...)”*

*La diferencia tradicional entre cláusula compromisoria y compromiso ha sido entendida en que la primera deroga eventualmente la jurisdicción de los jueces ordinarios, mientras que el compromiso la deroga actualmente. (sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 11 de febrero de 1954).*

*El compromiso, como se sabe, no forma parte del contrato inicialmente pactado entre las partes, sino que es un acto jurídico de nacimiento posterior, que surge cuando así se conviene por ellas para que se le dé solución a un conflicto posterior al contrato que, de no mediar el compromiso, debería ser decidido por la jurisdicción del Estado. El compromiso requiere la preexistencia del conflicto, de la contención, de la controversia jurídica por unos hechos determinados. No puede imponerse unilateralmente por una de las partes a otra, como un ejercicio abusivo del derecho para sustraer la decisión del litigio por los jueces. Exige, necesariamente que se pacte de manera autónoma, esto es, con una voluntad libre, exenta de vicios en el consentimiento, pues se trata nada menos de la derogación de la jurisdicción para el caso concreto.*

*Entonces, dada la trascendencia de la decisión del trabajador de renunciar a la justicia ordinaria para la solución de sus conflictos, nace para el Estado, a través del legislador, la obligación de adoptar las precauciones que estime convenientes.*

*En el caso sub exámine consideró el legislador que se equilibraban las partes en este aspecto, bajo la presunción de que si la cláusula compromisoria consta en convención o pacto colectivo, querría decir que tal decisión había sido producto de una amplia discusión previa, en la que participaron el sindicato o los representantes de los trabajadores, y, por consiguiente, se adoptaba libre de presiones. De esta manera se limita la posibilidad de que tal renuncia sea producto de una aparente decisión individual del trabajador, quien para no poner en juego su contrato de trabajo, se vería obligado a firmar cláusulas con las que ni esté de acuerdo o que ni siquiera hubiere podido controvertir.*

Ahora bien, en el caso concreto se tiene lo siguiente: la cláusula compromisoria “sólo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo”, por lo que no es la figura aplicable en el presente asunto; de otra parte, el compromiso debe constar en “cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia”.

Lo pretendido por el demandante es el reintegro al empleo, pues manifiesta que fue contratado de manera aparente por intermediarios al servicio de Indega S.A. desarrollando actividades propias del objeto social de esta; sin embargo, fue en el mismo “CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA REVENTA” donde se pactó el compromiso, para dirimir cualquier conflicto ante el tribunal de arbitramento, contrariando así la norma y lo señalado por la Corte Constitucional de que este no se puede imponer unilateralmente por una de las partes, ya que se requiere que se pacte de manera autónoma, de manera libre y voluntaria. Asimismo, el arbitramento voluntario se predica, en los términos del mencionado artículo 130 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cuando surjan controversias entre empleadores y trabajadores.

Se debe tener en cuenta entonces, que no hay declaración de existencia de relación laboral entre el demandante e Indega S.A., asimismo, que se solicita la declaratoria de vicios del consentimiento para la suscripción del acuerdo

transaccional, con el consecuente reintegro al empleo, por lo que sería un despropósito exigir la convocatoria del tribunal de arbitramento, pues se insiste que, lo que se deberá definir a través de este trámite judicial es precisamente la naturaleza misma de la vinculación que existió entre las partes.

Además de lo dicho, no se puede pasar por alto que el documento denominado “*CONTRATO DE CONCESIÓN PARA LA REVENTA*”, visible en la página 131 a 138 de pdf “02. 2011-01272Expediente”, con el cual pretende la demandada Indega S.A. valerse para que se declare probada la excepción previa de falta de competencia, no se encuentra suscrito por las partes, por lo que no es viable en esta instancia acoger su contenido como si hubiese sido suscrito.

En tales condiciones, la excepción previa de falta de competencia no se encuentra demostrada, siendo del caso **CONFIRMAR** la decisión de instancia en tal sentido.

## **ii) Cosa juzgada**

Precisa esta Sala que, si bien el proceso es un conjunto de actos concatenados, observados por las partes y por el juez para la solución de un litigio, buscando la efectividad de los derechos subjetivos, no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo y, por tanto, extenderse a perpetuidad.

Como respuesta a este imperativo surge entonces la institución procesal de la cosa juzgada, la cual hace referencia a los efectos jurídicos de las sentencias en virtud de los cuales estas adquieren carácter de inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear otra vez el litigio, ni emitir un nuevo pronunciamiento.

Con respecto a este tema cabe precisar que, para que una actuación alcance el valor de cosa juzgada se requiere que concurren ciertos elementos, los cuales se encuentran presentes en el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo, que exige para su declaratoria que “...el nuevo proceso verse sobre el



*misimo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes”.*

Las pretensiones de la demanda van dirigidas a la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo del 1° de febrero de 1998 al 17 de diciembre de 2010, con el consecuente pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones. Subsidiariamente, se solicitó se declarará la inaplicación del acuerdo de transacción suscrito con la demandada.

Pues bien, para que la transacción se considere válida, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL1359-2022 indicó que deben cumplirse con los siguientes presupuestos: que “(i) exista entre las partes un derecho litigioso eventual o pendiente de resolver; (ii) el objeto a negociar no tenga el carácter de un derecho cierto e indiscutible; (iii) el acto jurídico sea producto de la voluntad libre de las partes, es decir, exenta de cualquier vicio del consentimiento, y (iv) lo acordado genere concesiones recíprocas y mutuas para las partes (CSJ AL607-2017), o no sea abusiva o lesiva de los derechos del trabajador”

Con dentro de las pretensiones de la demanda se busca la declaratoria de ineficacia del acuerdo transaccional suscrito entre las partes, con el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales, tales súplicas tienen fundamento en la forma cómo se llevó a cabo la suscripción de tal acuerdo, al considerarse que para su suscripción se presentaron presiones e intimidaciones en contra del demandante y su familia.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y atendiendo a que está en discusión la eficacia o no del acuerdo transaccional, pues a criterio del demandante este no fue producto de la voluntad libre, la excepción de cosa juzgada no podrá resolverse como previa, lo que conlleva a que su pronunciamiento se realice en la sentencia de fondo. En tal sentido se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido.

Por no prosperar la apelación formulada por la demandada Indega S.A., las costas procesales de la segunda instancia son de su cargo y en favor del demandante. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$200.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**,

**RESUELVE:**

Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS** y se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 082 del 16 de mayo de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>